



**ELIANA GONZALEZ
SAN MARTIN**

EDITORIAL

LA POLÍTICA DEL DESACUERDO EN TIEMPOS DE POLARIZACIÓN SILENCIOSA

“Cada vez con mayor frecuencia, estamos construyendo un tipo de lenguaje que deja de ser un medio para disputar ideas y pasa a funcionar como un arma para destruir o desacreditar. En efecto, las personas dejan de ser consideradas adversarias y pasan a ser enemigas, y para eso se utiliza un tipo de retórica diferente, no orientada al intercambio, sino a la descalificación. No se discute tanto qué se propone, sino desde dónde se habla y a qué grupo político pertenece.”

La política del desacuerdo en tiempos de polarización silenciosa



Eliana Gonzalez

Uruguay suele presentarse a sí mismo como un país con desacuerdos administrados, donde las diferencias políticas no impiden la cooperación ni la continuidad de ciertas políticas públicas. Esa imagen sigue teniendo fundamentos sólidos, pero hoy convive con transformaciones más sutiles en la manera en que se discute lo político. No se trata tanto de un aumento abrupto del conflicto ni de una ruptura de consensos básicos, sino de cambios graduales en el lenguaje, los tonos y las disposiciones hacia el otro. Explorar estas transformaciones importa no solo por una preocupación hacia los modales discursivos, sino porque las formas de discutir inciden (de manera indirecta pero persistente) en la capacidad del sistema político para diseñar, implementar y sostener políticas públicas.

La política democrática nunca fue un ejercicio en armonía ya que siempre implicó conflicto, persuasión y competencia. Lo que sí está cambiando (de manera más sutil pero persistente) es el lugar que ocupa el lenguaje en ese conflicto. Cada vez con mayor frecuencia, estamos construyendo un tipo de lenguaje que deja de ser un medio para disputar ideas y pasa a funcionar como un arma para destruir o desacreditar. En efecto, las personas dejan de ser consideradas adversarias y pasan a ser enemigas, y para eso se utiliza un tipo de retórica diferente, no orientada al intercambio, sino a la descalificación. No se discute tanto qué se propone, sino desde dónde se habla y a qué grupo político pertenece. En este desplazamiento, el adversario comienza a ser percibido menos como alguien con quien se discrepa y más como alguien frente al cual hay que tomar distancia. Este punto es clave, porque el diálogo tiende a debilitarse incluso antes de comenzar, no por falta de argumentos, sino porque se presume de antemano la “mala fe” de quien piensa distinto. Las palabras se utilizan para deslegitimar, ridiculizar o moralizar al otro, dejan de utilizarse para discutir políticas y empiezan a funcionar como marcadores de pertenencia y exclusión.

Es decir, las posiciones ya no se construyen a partir de argumentos, sino que se presuponen según la ubicación política. Estar de un lado implica, casi automáticamente, sostener ciertas creencias y rechazar otras. Esa lógica reduce el espacio para el matiz y vuelve cada vez más difícil el diálogo entre quienes se ubican en veredas distintas. Este modo de entender la política no se explica solo por diferencias ideológicas, sino por la carga emocional que se proyecta sobre el otro, por lo que el problema deja de ser qué se discute y pasa a ser con

quién. Ese es precisamente el núcleo de la polarización afectiva.

La polarización afectiva no es necesariamente una radicalización ideológica ni un aumento en las diferencias programáticas. Se trata de un tipo de polarización en el que lo que se intensifica no son tanto las ideas, sino la carga emocional asociada a la pertenencia política, esto es, afectos positivos hacia el propio grupo y emociones negativas hacia quienes quedan fuera de él. Aun cuando las posiciones sustantivas no se vuelvan más extremas, el adversario político deja de ser alguien con quien se puede disentir y negociar, para convertirse en alguien en quien no se puede confiar ni escuchar, alguien a quien ya no se reconoce como interlocutor válido. Cuando eso ocurre, el desacuerdo político deja de operar sobre argumentos y pasa a organizarse sobre desconfianzas y rechazos personales, entonces no hay nada que negociar, corregir o pactar; y esto genera consecuencias directas para la capacidad de construir, sostener y evaluar políticas públicas.

Uruguay se presenta como un país de baja polarización ideológica. La estabilidad del sistema de partidos, la alternancia en el poder y una tradición de acuerdos básicos sostienen esa imagen. Sin embargo, la evidencia reciente invita a matizar ese diagnóstico. Nuevos estudios comparados como el de Moraes y Béjar (2024) sobre el caso uruguayo muestran que el país registra niveles relevantes de polarización afectiva, incluso en un contexto donde las distancias ideológicas no son particularmente pronunciadas. Lo que significa que el país no está profundamente dividido en ideas, programas o posiciones ideológicas, pero sí muestra divisiones emocionales y simbólicas entre identidades políticas.

Una encuesta reciente realizada por El Observador junto a académicos de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos (UMAD) de la Universidad de la República muestra que, si bien muchas áreas presentan consensos amplios, existen ciertos temas que generan divisiones nítidas y consistentes entre bloques políticos. Por ejemplo, ante la frase “A 40 años del fin de la dictadura en Uruguay es momento de 'dar vuelta la página' incluso si eso implica dejar de buscar a los desaparecidos”, sólo el 9,2% de los frenteamplistas está “bastante o muy” de acuerdo, frente al 71,3% de los votantes de la Coalición Republicana. Otras cuestiones vinculadas al feminismo o la percepción de sesgo ideológico en la Universidad de la República o a la desigualdad ante la justicia también aparecen como algunos de los asuntos más polarizantes en el electorado uruguayo. Esta polarización programática, conviene aclararlo, no es en sí misma un problema. De hecho, puede ser una buena noticia ya que

indica que los partidos no son intercambiables y que existen proyectos políticos diferenciados. El desafío emerge cuando esas diferencias comienzan a cargarse afectivamente y a operar como atajos cognitivos, es decir, cuando una política se evalúa menos por su contenido y más por la identidad política de quien la impulsa.

Pensemos en cómo opera este mecanismo en la práctica cuando analizamos el debate en torno a algunas políticas específicas. La discusión sobre la seguridad pública, por ejemplo, tiende a desplazarse desde la comparación de estrategias, evidencia o resultados, hacia oposiciones morales simplificadas (mano dura versus permisividad, orden versus derechos), que moralizan el desacuerdo y empobrecen la discusión. Algo similar ocurre en el ámbito de la política económica, donde debates sobre déficit fiscal, gasto público o endeudamiento abandonan rápidamente el terreno técnico para convertirse en juicios sobre responsabilidad, sensibilidad social o alineamientos ideológicos, reduciendo la disposición de acuerdos interpartidarios en temas que requieren estabilidad y previsibilidad. En conjunto, estos casos muestran cómo la polarización afectiva transforma problemas públicos en campos de disputa simbólica, dificultando el diseño, implementación, evaluación y sostenibilidad de políticas.

La intención no es partir de un diagnóstico alarmista. Uruguay no está condenado a una polarización afectiva extrema. Su tradición institucional, su sistema de partidos y nuestra cultura política ofrecen recursos valiosos para contenerla. Pero estos recursos no operan solos, requieren ser activados y defendidos. Recuperar prácticas deliberativas no significa aspirar a consensos artificiales ni negar el conflicto; significa reconstruir modestamente reglas mínimas del desacuerdo: el poder cuestionar una política sin deslegitimar a quien la propone, poder repensar y ajustar una posición sin ser estigmatizado, poder disentir sin convertir al otro en un adversario moral o “enemigo”.

Por otro lado, en un contexto en el que dar un buen discurso ya no garantiza que alguien esté dispuesto a escuchar, el desafío es doble: cómo hablar y cómo escuchar. Estudios recientes sobre interacciones políticas en las redes sociales permiten observar con claridad esta dinámica. Aunque Uruguay mantiene una agenda relativamente compartida y un sistema con pluralismo interno, las redes sociales muestran una escena distinta: una división nítida entre oficialismo y oposición, con escasas interacciones cruzadas entre las élites políticas (se siguen e intercambian menos).

Este escenario se complejiza aún más si tenemos en cuenta la existencia de ciertos actores (con peso institucional relevante) que ocupan un lugar central en las redes radicalizando el debate y habilitando un tono cada vez más áspero en la conversación política. Cuando ese estilo se valida, se naturaliza y se vuelve rentable, el sistema político empieza a pagar costos de coordinación.

Evidentemente, la polarización afectiva se reproduce por incentivos comunicacionales. En un ecosistema altamente mediático y digital donde la visibilidad, viralización y la confrontación generan réditos, los mensajes más duros tienden a amplificarse. Este entorno premia la simplificación y penaliza la complejidad, empujando a los actores políticos a adoptar un tono más categórico. El resultado no es solo un debate más áspero, sino un contexto menos favorable para discutir políticas públicas que requieran explicar trade-offs, incertidumbre y costos, elementos difíciles de transmitir en formatos dominados por la lógica del impacto inmediato y por climas emocionales que tienden a deslegitimar el matiz, la duda o la revisión crítica. Este último punto es clave, ya que este clima modifica la relación entre la ciudadanía y las políticas públicas. Cuando el debate se organiza en clave afectiva, se debilita la disposición social a tolerar políticas complejas, costosas o de largo plazo. Las expectativas se vuelven más inmediatas y la paciencia frente a procesos graduales disminuye. En ese contexto, corregir una política, reconocer errores o introducir ajustes puede ser leído no como una mejora razonable, sino como una señal de fracaso o improvisación. Esto restringe la capacidad del Estado para sostener políticas que requieren continuidad, aprendizaje y adaptaciones sucesivas, aun cuando estén bien fundamentadas.

Este fenómeno no se da de manera abrupta ni espectacular, sino a través de pequeños desplazamientos acumulativos. Las discusiones tienden a volverse más reactivas, los matices se leen con ambigüedad y los ajustes de posición pueden ser leídos como señales de debilidad. En este contexto, las políticas complejas (aquellas que requieren tiempo, evidencia y acuerdos transversales) pueden enfrentar mayores dificultades para sostenerse porque se reducen los márgenes de aprender, corregir y cooperar. Recordemos que los ámbitos donde se diseñan y evalúan políticas públicas (centros técnicos, instituciones académicas, entre otros) no son impermeables al clima del debate público. Cuando la desconfianza se generaliza, existe el riesgo de que datos e informes dejen de ser percibidos como insumos comprometidos para decidir y comiencen a leerse en clave partidaria. Por tanto, cuidar el lenguaje público no es una cuestión de corrección política, sino una condición para que las

políticas públicas puedan construirse y sostenerse en el tiempo.

Eliana Gonzalez San Martin
Licenciada en Ciencia Política - UdelaR

Referencias

(1) Juan A. Moraes and Sergio Béjar. "Affective polarization in Latin America" Handbook of Affective Polarization (2025): 136-151.

<https://doi.org/10.4337/9781035310609.00016>

(2) <https://www.elobservador.com.uy/nacional/feminismo-y-busqueda-desaparecidos-los-temas-que-mas-dividen-los-votantes-uruguayos-n6012667>

(3) <https://nuso.org/articulo/polarizacion-redes-uruguay/>